



Goberador electo de NL/FGR tras Samuel García por lavado de dinero

(José Gil Olmos, pág. 6-8)

Samuel Alejandro García Sepúlveda planea tomar posesión el 3 de octubre como gobernador de Nuevo León, pero la fiesta del senador y cabeza del proyecto político de Movimiento Ciudadano para la elección presidencial de 2024 está en riesgo: la Fiscalía General de la República (FGR) lo tiene en la mira y está por consignar su expediente, en el que lo acusa de lavado de por lo menos 40 millones de pesos de 2016 a 2020 mediante una red de empresas fantasma.

De acuerdo con información a la que Proceso tuvo acceso, en el expediente que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez, su suegro Jorge Gerardo Rodríguez y su padre Samuel Orlando García Mascorro.

Entre los cuatro se habría establecido una red de lavado de dinero mediante empresas fantasma, en un mecanismo similar al caso del Cruz Azul y el empresario del outsourcing Raúl Beyruti, con movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y el uso de empresas factureras como fachada.

O semejante al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que compró un departamento usando una facturera: una empresa fantasma para transitar los recursos con los que lo pagó.

Lista negra

Los alcances judiciales de la investigación que integra la FGR por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal podrían llegar antes de que García tome posesión como gobernador de Nuevo León, en octubre.

En la investigación que realiza la FGR sobre Samuel y su familia aparecen dos empresas manufactureras ubicadas en Nuevo León: Grupo Renok y Zulamak, calificadas como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y anotadas en listas negras publicadas en 2015 y 2018; es decir empresas que han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

El SAT publica en su portal web la lista negra de las empresas catalogadas como “presuntas”, al haber sido identificadas como posibles EFOS, y “definitivas”, cuando éstas no han desvirtuado en tiempo y forma las observaciones hechas por la autoridad y por ende son confirmadas como EFOS.



El 29 de mayo de 2015 el Sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el oficio 500-05-2015-26774 con una notificación identificando de manera definitiva a Renok en una lista de EFOS.

Mientras que la empresa Servicios y Asesorías Zulamak recibió el oficio 500-41-00-03-02-2018-5966 de fecha 31 de octubre de 2018 del SAT con una notificación definitiva, advirtiéndole que al igual que Renok emitió comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Los tentáculos del abuso de EPN y la opacidad en la 4T

(Mathieu Tourliere, pág. 12-15)

Con el poderoso spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, el expresidente de México Enrique Peña Nieto, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y sus respectivos grupos políticos aprovecharon las agencias de inteligencia del Estado, su infraestructura tecnológica y sus partidas presupuestarias secretas para realizar operaciones masivas de espionaje contra decenas de periodistas, al menos 120 defensores de derechos humanos y contra poco más de 700 opositores políticos.

Fueron tan evidentes y agresivos los abusos cometidos por las agencias del gobierno federal mediante la poderosa herramienta tecnológica, que en 2017, después del escándalo conocido como Gobierno Espía, NSO Group prefirió no renovar las licencias que había vendido por decenas de millones de dólares a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Una fuente que conoce las operaciones de NSO Group en México explica que la empresa israelí, incluso, se negó a vender su programa espía Pegasus a la Policía Federal, pues consideró que la institución, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), era “una de las entidades más corruptas en México”; el rechazo se dio pese a que la corporación de seguridad estaba interesada en la plataforma de espionaje y dispuesta a ofrecer un alto precio por ella.

A lo largo de la semana última, la investigación internacional Pegasus Project, en la que participaron Proceso y otros 16 medios de 10 países, bajo la coordinación de Forbidden Stories y con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, reveló que entre el verano de 2016 y finales de 2017 el Cisen, la AIC y la Sedena seleccionaron más de 15 mil números telefónicos en sus plataformas de Pegasus, en lo que sería el paso preliminar para un eventual ataque espía.



La cifra de números telefónicos representa prácticamente una tercera parte de los más de 50 mil registros de plataformas de Pegasus de 10 países clientes de NSO Group a los que tuvieron acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional.

La información retrata al gobierno de Peña Nieto como el usuario más fiel de ese sistema de espionaje, por encima de monarquías u otros regímenes autoritarios, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Azerbaiyán, Hungría o India, que también usaron Pegasus para atacar voces críticas, así como a rivales políticos y a por lo menos 13 jefes de Estado.

Pegasus le permite a una agencia gubernamental acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de una persona, incluyendo mensajes -SMS, Whats- App y otras aplicaciones de mensajería- y correos electrónicos; con el programa, el usuario tiene la posibilidad de vigilar la geolocalización del objetivo en cualquier momento y grabar sus llamadas; además puede activar el micrófono y la cámara cuando lo desee.

Víctimas

Después de meses de investigación y análisis de los 15 mil registros se encontraron entre los blancos de espionaje del gobierno de Peña Nieto a periodistas, incluyendo a seis de la revista Proceso: Rafael Rodríguez Castañeda, Jorge Carrasco, Arturo Rodríguez, Alejandro Caballero, Alvaro Delgado y Jenaro Villamil.

También están los números telefónicos de Carmen Aristegui -otra participante del Pegasus Project-, integrantes de su equipo de investigación, así como su hijo y una hermana; de igual manera, los fundadores de la organización Quinto Elemento Lab -Marcela Turati, Alejandra Xanic, Ignacio Rodríguez Reyna y Daniel Lizárraga-y Cecilio Pineda, periodista guerrerense asesinado en marzo de 2017, apenas un mes después de ser seleccionado en la plataforma de Pegasus.

Asimismo fueron identificados los números de miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Cristina Bautista y Melitón Ortega, abogados de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y familiares de dos estudiantes desaparecidos.

De igual manera, decenas de líderes de organizaciones indígenas -como Carlos González García, integrante de la coordinación nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) y esposo de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy- y los números telefónicos de defensores de derechos humanos, activistas que acompañan a personas amenazadas o víctimas, así como de decenas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.



Esta vigilancia ilegal masiva se expandió a lo largo del sexenio durante el cual México se convirtió en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo - la organización internacional Artículo 19 registró 2 mil 502 agresiones contra periodistas, entre ellas 47 asesinatos-, y donde al menos 161 defensores de derechos humanos fueron asesinados.

Acecho político Entre los objetivos políticos del espionaje destacaron más de 50 integrantes del primer círculo familiar y político del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sus tres hijos mayores (Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán) y tres hermanos (Pío, Arturo y Martín), así como 15 personas que tienen o han tenido cargos clave en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, como Julio Scherer Ibarra, Gabriel García Hernández, Alejandro Esquer Verdugo, Jesús Ramírez Cuevas, Alfonso Romo Garza, César Yáñez Centeno, Manuel Bartlett Díaz, Rocío Nahle García, Delfina Gómez Álvarez, Alfonso Durazo Montañó y el senador Ricardo Monreal Ávila.

También fueron seleccionados los números telefónicos de los líderes de Morena Berta Lujan, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado; del PAN, Gustavo Madero Muñoz, Ricardo Anaya Cortés, Damian Zepeda Vidales y Marko Cortés Mendoza; y del PRD, así como 55 gobernadores de todos los partidos políticos, seleccionados por el Cisen y la Sedeña.